

REGRESIÓN O AVANCE DEMOCRÁTICO EN MÉXICO. CONSTRUCCIÓN CIUDADANA.

Democracia y ciudadanía son temas que se preceden uno al otro. Teniendo como referente la necesidad de una participación activa del pueblo para el ejercicio del poder.

No obstante señala Sergio Tamayo señala, que no toda la participación es igual ni es sus mecanismos ni en sus procesos. Depende mucho del modelo de ciudadanía y de la cultura política del país, del contexto socio-histórico en el que se presentan las diversas formas de acción e institucionalización; del conjunto de actores sociales y políticos que se enfrentan entre sí como adversarios; y del grado de profundización de los conflictos.¹

De tal forma que es importante realizar un análisis sobre la trayectoria en materia de democracia que permita dilucidar qué tan sólida es nuestra democracia, qué papel ha jugado en ella la participación ciudadana, y qué se considera construcción ciudadana, para después usar una serie de herramientas metodológicas que nos permitan establecer algunos parámetros al respecto.

El tema presenta varias aristas y merece ser abordado a fin de tender los puentes necesarios que permitan transitar sobre caminos de mayor certeza. Las propuestas son interesantes en relación a la Construcción Ciudadana, buscando la reivindicación del activismo político y la multiculturalidad.

Las elecciones del 2006 y las elecciones del año en curso, han significado una dura prueba para la solidez de las instituciones electorales que emergieron de la reforma de 1996. Con ellas se pone de manifiesto la fuerte polarización política y particularmente partidista e ideológica que existe en el país. Ante todo, esta elección coloca en el centro del debate público nuestra capacidad como sociedad para consolidar los avances democráticos logrados o estancarnos en luchas intestinas por espacios de poder ante la incapacidad de nuestras instituciones políticas para contener las ambiciones propias de los

¹ **TAMAYO** Sergio, Crítica de la ciudadanía, siglo XXI Editores, S.A. de C.V., México, 2010, pp.88-89

políticos, hacer valer la ley y responder a las demandas sociales de paz y justicia social.

Pese a las dudas que la coyuntura actual ha sembrado, la evidencia presentada muestra que en México la democracia se dio por la vía electoral que permitió el fortalecimiento paulatino de los partidos políticos que, poco a poco, fueron capaces de negociar reformas electorales verdaderamente significativas que garantizan elecciones libres, limpias, transparentes y justas.

Estoy convencida que una de las áreas de mayor incertidumbre en nuestra democracia es el avance o regresión democrática y la calidad de los actores políticos, contándose entre ellos la calidad de la participación ciudadana y la construcción de una nueva ciudadanía. Quedando plasmado que la democracia se consolida y se convierte en el único juego posible, solo si los actores deciden jugar y respetar sus reglas básicas.

Hoy toca consolidar la democracia electoral a la que transitamos para poder dar pasos firmes hacia la meta superior que es lograr gobiernos no solo legítimos sino eficientes a través de una construcción ciudadana que no solo ejerce su derecho al voto sino que sea participe del ejercicio del poder público.

Es importante realizar una reflexión sobre el camino andado en materia de democracia para después usar una serie de herramientas metodológicas que permitan ver que tan sólida es nuestra democracia y en esa medida establecer algunos parámetros.

Las elecciones del 2006, inéditas en muchos sentidos, han significado una dura prueba para la solidez de las instituciones electorales que emergieron de la reforma de 1996. Como las primeras elecciones temáticas y por tanto ideológicas ha puesto de manifiesto la fuerte polarización política y particularmente partidista e ideológica que existe en el país. Ante todo, esta elección coloca en el centro del debate público nuestra capacidad como sociedad para consolidar los avances democráticos logrados o estancarnos en luchas intestinas por espacios de poder ante la incapacidad de nuestras instituciones políticas para administrar las ambiciones propias de los políticos, hacer valer la ley y responder a las demandas sociales de paz y justicia social.

LAS INTERPRETACIONES DE LA TRANCISION

La transición mexicana a la democracia² ha sido objeto de innumerables estudios. En muchos de ellos se hace una constante referencia a las reformas electorales y al fortalecimiento paulatino de los partidos de oposición como los mecanismos fundamentales del cambio político en México³. En este sentido, parece haber un consenso respecto al caso mexicano como uno más de democratización por la vía electoral⁴. Sobre la base de este consenso las diversas interpretaciones sobre la transición en México difieren en términos de temporalidad –cuando empezó y cuando termino la transición-, así como el papel de los actores y procesos clave y respecto del momento en que el sistema político se encuentra ahora.

En este sentido a diferencia de quienes acentúan la deslegitimación del monopolio de un partido o los pactos entre elites, en este trabajo se enfatiza el papel que ha desempeñado la competencia en la arena electoral y su atributo fundamental, la competitividad. Se afirma que han sido estas las fuerzas que han fracturado las instituciones autoritarias utilizadas por décadas, para llevar a cabo elecciones pretendidamente democráticas pero, en realidad, profundamente fraudulentas y manipuladas⁵

La reforma electoral de 1996 desincentivo en algún sentido la innovación jurídico electoral pues incluyo entre sus nuevos lineamientos la obligación de

2 Solo como referencia vale la pena recordar que, según O'DONELL, el concepto de transición hace referencia al “intervalo que se extiende entre un régimen político y otro...Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno de algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de alguna alternativa revolucionaria”. Vid, id. Transiciones desde un gobierno autoritario: 4 conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 19-30

3 BECERRA, Ricardo, SALAZAR, Pedro y José WOLDENBERG, La mecánica del cambio político en México.

4 Vid., SCHEDLER, Andreas, “The Nested Game of democratization by Elections”, en International Political Science Review, vol. 23, num. 1 pp. 103-122

5 Vid., MENDEZ, DE HOYOS, Irma, Transición a la democracia en México; Reformas electorales y competencias partidista 1977-2003, México, FCE, 2006, p.14

todos los estados de establecer reglas para garantizar la igualdad, legalidad y transparencia de los procesos electorales estatales y, a la vez, normas no contrapuestas a las federales. El impacto de esta modificación fue sustantivo pues a partir de 1996 todos los estados iniciaron una serie de reformas electorales para compatibilizar las normas estatales con las federales, en algunos casos, para buscar nuevos arreglos institucionales que les permitieran encontrar el punto medio entre el estándar normativo federal, las necesidades y condiciones políticas locales.

Después de la última reforma federal de 1996 que marco la independencia total de los órganos electorales federales respecto al gobierno, el proceso de reformas a nivel estatal entro en una nueva fase, en gran medida caracterizada por tendencias diferenciadas en el grado de justicia de las leyes. En algunos estados se percibe un avance muy gradual, sin embargo, solo en unos cuantos se ha llevado a cabo un cambio acelerado positivo y hay incluso casos de marcado retroceso.⁶

De acuerdo a los Criterios Internacionales de Elecciones Libres y Justas, aplicados a las leyes electorales mexicanas, las reformas electorales federales de 1994 y 1996 acabaron con el control gubernamental de las elecciones y obtuvieron la independencia total de la autoridad electoral respecto al Poder Ejecutivo. Dichas reformas movieron al sistema electoral federal hacia elecciones genuinamente libres, transparentes y justas. La limitante más importante para que las leyes electorales federales obtuvieran un mayor grado de justicia fueron los difíciles requisitos impuestos a los candidatos y partidos para entrar en la arena electoral. Parece evidente que, mientras el sistema electoral se ha modificado extensamente, el sistema de partidos y en particular las reglas que gobiernan la vida y participación electoral de partidos y candidatos, siguen siendo temas pendientes en la agenda publica.

⁶ Hay un número importante de estados donde ha habido retrocesos pero no enmiendas, de tal manera que podemos hablar de retrasos permanentes. En este caso sobresalen San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Oaxaca y en menor medida, Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Veracruz. Los años en que domina esta “manipulación” de las leyes electorales van de 1994 a 1998 que es después del gran salto electoral en la composición y funcionamiento del IFE con las reformas de 1994 y 1996

En suma, la evidencia mostrada, sugiere que México ha transitado efectivamente del control gubernamental de las elecciones a una competencia abierta, justa y transparente de la hegemonía de un partido a elecciones plurales y competitivas. Ambos procesos condensan la transición mexicana a la democracia, cuya consolidación parece estar en marcha y haber enfrentado una dura prueba en las elecciones federales de 2006.

Pese a las críticas y descalificaciones que pretenden desconocer el producto de 20 años de lucha por la democracia, considero que el piso básico de la democracia constituido por las elecciones competitivas con reglas de juego que garantizan contiendas justas, libres y transparentes es parte de nuestro capital político.

Las elecciones democráticas están solidas en México y son el único mecanismo legítimo para elegir a nuestros gobernantes. En este campo no hay regresión posible. La confianza que existe en las elecciones democráticas tiene que consolidarse y esto requiere el consenso de actores políticos, sociales y económicos; es decir de todos.

REFORMAS QUE SIGNIFICAARON UN ADELANTO EN LA DEMOCRACIA POLÍTICA EN MÉXICO.

LAS REFORMAS, CONSTITUCIONAL Y ELECTORALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1977 HASTA ANTES DE 2007

De 1977 a 1994 se vivió una etapa de reformas electorales “cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral”⁷, en virtud de lo cual se ampliaron los espacios de representación tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los Congresos de las entidades fede(s)-79()-2-83(n)-83(t)-81(i(ó))-83(7(a)-8

acceso a la creación de partidos políticos, lo cual al principio no fue muy fácil.

No obstante, la reforma permitió que desapareciera el sistema de diputados de partido que se implementaba con anterioridad, así, el Congreso de la Unión, sufrió una gran transformación.

REFORMAS A LA LEY ELECTORAL DE 1986.

En 1986, en el nuevo Código Federal Electoral que sustituía a la anterior Ley de organizaciones políticas y procesos electorales, se introdujo el principio de la representación proporcional, de tal forma, que las minorías podían acceder a 150 curules de la Cámara de Diputados, mientras que a la par se estableció que ningún partido podía tener más de 350 diputados.

Durante el sexenio que va de 1988 a 1994, se desarrollaron reformas electorales que vinieron a complementar las de los años anteriores, siguiendo la tarea de creación incipiente de las instituciones electorales. De esta forma, se reformaron e introdujeron los aspectos siguientes:⁸

La organización de las elecciones federales y los órganos encargados y sus principios rectores.

Creación del Instituto Federal Electoral

Elección de diputados y representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

Calificación electoral e integración de los colegios electorales,

Introducción de disposiciones en materia de lo contencioso electoral.

⁸ www.bibliojuridica.org/libros/1/93/11.pdf

Posteriormente, se realizó otra reforma, que contempló los siguientes tópicos:

- a).- Financiamiento a los partidos políticos
- b).-Supresión de la cláusula de gobernabilidad,
- C.-Nueva integración del Senado de la República,
- d).-Establecimiento del Tribunal Federal Electoral

Todas las anteriores reformas, abonaron a la construcción de un mejor escenario electoral, que generaba mayor confianza.

LAS REFORMAS ELECTORALES DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 1989 A 1996.

Se ha estimado que otra etapa importante de reformas electorales que se ha dado en nuestro país se ubica en el periodo comprendido de 1989 a 1996, en que se lograron los mejores avances, toda vez que se “transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano”⁹; en esta etapa pueden distinguirse tres fases:

1) En 1994 se alcanzó la ciudadanización del Instituto Federal Electoral y se implementó un sistema de medios de impugnación para asegurar la legalidad de todos los actos que se realizaran en el proceso electoral,

2) En 1996, la reforma tuvo como ejes principales la autonomía constitucional otorgada al Instituto Federal Electoral y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, definido como máxima autoridad en materia electoral, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3).- Elección popular en el Distrito Federal.

⁹ *Ídem.*

4).- Extensión de la Reforma al resto de los Estados de la República.

A esta etapa de reformas pertenecen la que estableció el principio de equidad de género en las candidaturas y la que reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.¹⁰

Con la reforma también habría mejores condiciones para la competencia, al establecerse que la parte fundamental del financiamiento a los partidos políticos sería pública mediante una distribución de una bolsa del 30% dividida por igual entre los partidos políticos con registro y una del 70% que se repartiría de acuerdo con la votación anterior.

Las elecciones a partir de 1997 significaron un gran salto adelante en la democracia política en México. Después de muchos años, el partido del gobierno perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, generándose una situación de poder compartido o de gobierno dividido en donde el Ejecutivo no tenía la posibilidad de procesar sus propuestas electorales de manera expedita, ya que la mayoría se encontraba en manos de los partidos opositores. Así, en el año 2000 se perdió la presidencia de México. Con ello se consumó la alternancia y la transición política en México.

LAS REFORMAS, CONSTITUCIONAL Y ELECTORALES DE 2007

LA REFORMA ELECTORAL DE 2007.

En el mes de septiembre de 2007, las Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron diversas reformas a nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹¹, dando

¹⁰ *Ídem.*

¹¹ *Íbidem.*

paso a la que han considerado una “tercera etapa de reformas electorales.”¹²

Con la consideración de que “La tercera generación de reformas electorales debía dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación”, y de que “Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales”¹³, esta tercera generación de reformas electorales se da “en los siguientes tres ejes:

a) Disminuir en forma significativa el gasto de campañas electorales;

b) Fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y

c) Diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos”¹⁴.

LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, modifica nueve artículos de la Carta Constitucional; las que competen al artículo 41 fueron las siguientes:

a) Sistema de partidos

- Se da sustento constitucional al registro legal de partidos políticos nacionales ante la autoridad electoral;

¹² *Íbidem.*

¹³ *Íbidem.*

¹⁴ Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 9, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. <http://gaceta/diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html>. p. 2. (Consulta: Enero 12 de 2009).

- Se otorga facultad exclusiva a los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular

b) Financiamiento público y privado de partidos políticos

- El financiamiento público anual para actividades ordinarias se calculará en base a dos factores: a) el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, y b) el 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- El financiamiento público para campañas electorales será igual al 50% del monto para actividades ordinarias, cuando se elijan Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados y senadores al Congreso de la Unión; será igual al 30% cuando sólo se elijan diputados federales;
- El financiamiento público para actividades específicas será igual al 3% del monto total destinado a actividades ordinarias.

c) Topes de gastos de precampañas y de campañas electorales

- Establece límites a las erogaciones en los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular y en las campañas electorales;
- Fija un monto máximo a las aportaciones de simpatizantes; no más del 10% del tope de gastos de la última campaña presidencial.

d) Liquidación de obligaciones y bienes de los partidos políticos

- Regulación de liquidación de obligaciones y adjudicación a la Federación de los bienes de un partido político cuando pierda su registro.

e) Acceso a los medios de comunicación social

- Crea un nuevo modelo de comunicación social que da derecho a los partidos políticos al uso permanente de los medios de comunicación social;
- El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales a su acceso y uso;
- Se establecen bases de distribución de tiempo para cada partido político y horarios de transmisión en tiempos de campaña (se contará con 48 minutos cada día);
- El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos (85% del tiempo disponible) se distribuye entre ellos siguiendo la regla de 30% repartido en forma igualitaria y el 70% restante conforme a los resultados de la última elección de diputados;
- Fuera de los tiempos de campaña, se asignará al Instituto Federal Electoral el 12% del tiempo del que el Estado disponga en radio y televisión; de este tiempo, el 50% se distribuirá de forma igualitaria entre los partidos políticos;
- Se prohíbe a los partidos políticos contratar o adquirir tiempos en radio y televisión;
- Ninguna persona pública o privada podrá contratar propaganda política en radio y televisión dirigida a favor o en contra de determinado candidato o partido;
- Quedan prohibidas en territorio nacional las transmisiones del tipo referido, que hubieren sido contratadas en el extranjero;
- Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos del Estado en radio y televisión en estaciones de cobertura local;

- El Instituto Federal Electoral tendrá facultades para, si es el caso, cubrir el tiempo faltante en radio y televisión;
- Queda prohibida la propaganda que denigre a las Instituciones y a los Partidos Políticos o que calumnie a las personas;
- Ordena suspender la difusión de propaganda gubernamental durante los tiempos de campañas electorales, federales o locales, de los partidos políticos, excepto las campañas informativas de autoridades electorales, servicios educativos y de salud, y los necesarios para la protección civil en caso de emergencia;
- El Instituto Federal Electoral tendrá facultad para sancionar mediante procedimientos expeditos, las infracciones a las anteriores reglas.

f) Precampañas y campañas electorales

- Sienta la base constitucional para que la ley de la materia establezca los plazos para la selección interna y postulación de candidatos a cargos de elección popular por parte de los partidos políticos, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales,
- Queda establecido que las precampañas no podrán tener una duración que exceda las dos terceras partes del tiempo establecido para las campañas electorales;
- En el año en que se elija Presidente de la República, diputados y senadores, las campañas electorales tendrán una duración de noventa días; cuando sólo se elijan diputados, la duración de las campañas será de sesenta días.

g) Contraloría interna del Instituto Federal Electoral

- Se crea una contraloría interna del IFE, que tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto;
- Su titular será nombrado por la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que presenten instituciones públicas de educación superior.

h) Consejo General del Instituto Federal Electoral

- El Consejero Presidente del Consejo General del IFE, durará en su encargo seis años, pudiendo ser reelecto por una sola vez;
- Los Consejeros Electorales durarán en su encargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos;
- Uno y otros serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.
- Dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, no podrán ocupar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

i) Órgano de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos

- Se crea un órgano de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, como un órgano técnico del Consejo General del IFE, con autonomía de gestión;
- Este órgano en el cumplimiento de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal;
- Este órgano será el conducto para que las autoridades de los Estados puedan superar las limitaciones referidas.

j) El Instituto Federal Electoral en procesos electorales locales

- El Instituto Federal Electoral, mediante convenio con las autoridades electorales de los Estados que lo soliciten organizará los procesos electorales locales, en los términos de la legislación aplicable.

REFORMAS AL ARTÍCULO 99

En lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reforma consistió en lo siguiente:

- Se otorga permanencia a las Salas Regionales del Tribunal Electoral;
- La competencia de las Salas del Tribunal Electoral para declarar la nulidad de una elección, se circunscribe sólo a las causales que expresamente establezcan las leyes;
- Para que el Tribunal Electoral conozca de impugnaciones de ciudadanos que consideren afectados sus derechos político-electorales por el partido político al que pertenezcan, deberán agotar previamente las instancias partidistas;
- Faculta al Tribunal Electoral a emplear los medios de apremio necesarios para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones;
- El Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, limitando la sentencia al caso concreto sobre el que verse el juicio, debiendo dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- La Sala Superior del Tribunal Electoral, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales podrá atraer los juicios de que conozcan éstas;
- La renovación de los Magistrados que integren las Salas Superior y regionales, será escalonada;

- Se unifica el período de encargo de los Magistrados electorales de las Salas Superior y regionales en nueve años.

REFORMA AL ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL

Esta reforma se dio respecto de los procesos electorales de las entidades federativas.

- Prohíbe la afiliación corporativa en la formación de partidos políticos, e instituye que se reconozca a los partidos políticos el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de los dispuesto en el artículo 2ª apartado “A”, fracciones III y VII de la Constitución;
- Que se establezca un procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;
- Que los partidos políticos accedan a la radio y la televisión en los términos del artículo 41, apartado “B”, base III;
- Que se establezcan bases de coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de finanzas de los partidos políticos;
- Que se fijen las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

REFORMAS AL ARTÍCULO 122 CONSTITUCIONAL

Este artículo constitucional fue reformado en lo concerniente a los Procesos electorales del Distrito Federal, quedando establecida la adecuación para que lo dispuesto en la fracción IV del artículo 116 Constitucional, respecto de los Estados de la Federación, fuese aplicable, en lo conducente, a los procesos electorales del Distrito Federal.

REFORMAS AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL

El artículo 134 fue reformado en el aspecto de la imparcialidad de servidores públicos, mediante lo cual quedo establecido lo siguiente:

- Se dispone que la propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, sin promover la imagen de los servidores públicos;
- Se impone a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Analizadas en su conjunto y desde un punto de vista formal y un sentido democrático amplio, puede afirmarse, que las reformas a la legislación en comento, fueron en pro de la democracia y en pos de un mejor desarrollo electoral, pues se ajustan a los principios de certeza, imparcialidad, igualdad y equidad, tan es así, que en su momento fueron debidamente diseñadas y aprobadas por la mayoría de las fuerzas políticas.

Durante la primera prueba a la que se enfrento esta legislación, es decir, en la elección intermedia de 2009, no se acusaron o señalaron mayores deficiencias, por lo que se considero en su momento, que tales reformas eran correctas y benéficas para el sistema político electoral.

La referida legislación, también ha pasado la prueba mayor, la elección presidencial de 2012.

Aun es temprano para juzgar de forma objetiva el resultado de las referidas elecciones, existen muchas voces que señalan graves defectos en la legislación electoral vigente y urgen a reformas para sancionar conductas no previstas por la reforma de 2007, sin embargo, el sistema resistió y fue debidamente sancionado y calificado como legal, no obstante se vierten argumentos de diversas prácticas fraudulentas que marcan la

legitimidad del ganador, tal comportamiento, quizá no pueda ser subsanado a través de la implementación de legislación al respecto, sino tal vez, en el fortalecimiento de una cultura de la legalidad y civilidad política.

No obstante lo temprano para adelantar conclusiones sobre las elecciones de 2012 en relación al funcionamiento de la legislación de 2007, existen amplios estudios al respecto, que nos indican como ha sido el funcionamiento de la reforma electoral de 2007, y uno que vale la pena mencionar, es el desarrollado por la COPARMEX y la Fundación Konrad Adenauer México, y Polilat, en su trabajo denominado “Índice de Desarrollo Democrático. México 2011” IDD-MEX2011, en su informe ejecutivo, mostro las fortalezas y debilidades de nuestro sistema:

FORTALEZAS

1. El país cuenta con una mayoría de estados con desarrollo democrático medio. Son pocos los estados con alto desarrollo democrático y subsisten varios con bajo desarrollo.
2. Más de la mitad de las entidades federativas ha mejorado su puntuación con respecto a 2010.
3. Hubo una mayor participación en los procesos electorales.
4. Aunque la población indígena sigue siendo el grupo social con los índices de desarrollo humano y social más bajos del país, ha mejorado su situación con respecto a los datos del conteo 2005.
5. Del Congreso, en la mayoría de las entidades, participa una cantidad ideal de partidos políticos. Si no existieran los efectos de la corrupción, esa composición facilitaría el cumplimiento de la agenda del Poder Ejecutivo, el logro de una razonable representación de la diversidad social y un reajuste para la gobernabilidad.

6. Las políticas de empleo desarrolladas han permitido recuperar niveles perdidos por la crisis económica de 2008 y 2009.

DEBILIDADES

1. Recesión democrática en México: La inseguridad es el tema que se ubica en el centro del debate de la política pública, como consecuencia del creciente clima de violencia que afecta profundamente a varios estados y amenaza con extenderse a todo el territorio nacional.

2. La ciudadanía percibe a sus sociedades como “parcialmente libres”, tanto en el respeto de las libertades civiles como en el respeto de sus derechos políticos, pero en 14 entidades se perciben sociedades “no libres”. La consecuencia en estos casos es un gran déficit democrático que afecta la necesaria tarea de construcción de ciudadanía. Ha disminuido levemente la cantidad de entidades que superan el promedio del Subíndice de Libertades Civiles.

3. Los partidos políticos no están consolidados en la construcción de democracia hacia el interior de sus propias organizaciones. Pese a toda la legislación y el financiamiento de promoción de las actividades de los partidos políticos, éstos limitan cada vez más su accionar a lo meramente electoral.

4. Aumenta la cantidad de hechos de violencia de género. Muchas organizaciones sociales están tratando de llamar la atención sobre este fenómeno para revertirlo, pero no siempre logran buenos resultados.

5. Las mujeres en el poder siguen siendo más una excepción que una regla, pese a los avances de los últimos años de la presencia femenina en esferas de poder público. Aparecen emblemáticos ejemplos de utilización electoral de las mujeres para cumplir con las cuotas de ley, con posterior desplazamiento de las mismas.

6.- En muchas de las entidades federativas debemos hablar de rezago en salud y en educación, y éstos constituyen los verdaderos déficits de la democracia, porque debajo de un cierto umbral se anulan las condiciones necesarias para el desenvolvimiento democrático.

En base al estudio anterior, que puede servir como uno de muchos parámetros en la materia, se puede afirmar, que en nuestro país, aun existen asignaturas pendientes, sin embargo, ello no significa que las ultimas reformas al sistema electoral de 2007, o en general el conjunto del sistema político electoral, hayan desmejorado o que se haya presentado un retroceso en materia electoral.

Y dentro de esas asignaturas pendientes se encuentra sin duda alguna la construcción ciudadana.

CONSTRUCCIÓN CIUDADANA

La ley pretende universalizar derechos y obligaciones y normar, en este caso, la vida política. Esa igualdad ante la ley- que trasciende las diferencias de riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología-rompe privilegios estamentales y corporativos de las sociedades premodernas y democráticas, construyendo es figura conocida por todos llamada ciudadanía pero con elementos que deben adherírsele hasta fortalecerlas aun más, ese basamento a partir del cual se pueda construir un entramado democrático soportado por hombres y mujeres con capacidad de discernir racionalmente entre las ofertas que se les presentan, que puedan contribuir con su opinión a la toma de acuerdos, que ellos mismos puedan agruparse para participar en los asuntos públicos y que como individuos den seguimiento puntual a sus representantes. La familiaridad que ésta palabra ha adquirido hace pensar que esta figura ya está terminada sin embargo queda mucho por hacer en la construcción ciudadana es una pieza fundamental que se engarza con un régimen democrático.

El ciudadano es la piedra angular del edificio democrático, tiene una serie de derechos y obligaciones: derechos civiles, políticos y sociales; confirmando que es el conjunto de los ciudadanos donde reside la soberanía, la fuente de todo poder político emana de la voluntad popular. Y de esa voluntad

popular surgen las normas y las instituciones que al mismo tiempo modulan las fórmulas de expresión de esa soberanía popular como característica nodal de todo régimen democrático.

La formación del ciudadano es, sin duda, una de las metas más importantes y prioritarias de las agendas político-educativas contemporáneas. La salud del sistema y de la democracia, la supervivencia de sus instituciones y las condiciones de gobernabilidad, pero sobre todo de legitimidad, dependen de las acciones ético-educativas que se encaren a efectos de capacitar a cada ciudadano para la práctica responsable, racional y autónoma de su ciudadanía; en este sentido, la construcción de una ciudadanía crítica y participativa parece ser la clave para resolver la diversidad de conflictos emergentes que reflejan la profunda crisis que afecta actualmente a este régimen: desigualdades, exclusiones y discriminaciones, en algunos casos; corrupción política, apatía y escepticismo cívico, en otros.

Un ejemplo, el problema de género y ciudadanía, que requiere la gestación de condiciones favorables para el acceso equitativo de varones y mujeres a las oportunidades, las decisiones políticas y los servicios sociales.

Por ello, y tal como Dewey (1953) lo ha planteado, es imposible pensar en una sociedad democrática, justa y solidaria sin una educación amplia e igualitaria que pueda imprimir en cada uno de sus miembros el carácter de una auténtica ciudadanía. Pero, la relación entre democracia y educación que postula Dewey (1953) sigue interpelándonos como un ideal. Su concepción de una democracia participativa, abierta e inclusiva y de una educación entendida como la provisión de igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de las potencialidades y la justa apropiación de los bienes materiales y culturales de una sociedad, se recupera y refleja en los reclamos de quienes luchan por quebrar el carácter conservador y exclusor de las democracias contemporáneas.

Se plantea pues la necesidad de pensar en un nuevo sujeto ciudadano, para lo cual se hace imprescindible mirar primero hacia el pasado a fin de reconocer las concepciones que se gestaron históricamente y de las que hoy se sostienen, de discriminar los valores, representaciones y estereotipos implicados en estas concepciones y en el conjunto de prácticas sociales que en ellas se fundan y de valorar el papel que le cupo a la escuela en esta

conformación. Esta mirada retrospectiva puede ayudar a tomar conciencia y a posicionarse mejor frente a la realidad que se quiere interpretar y transformar, para, a partir de este análisis, poder reconfigurar los supuestos y las bases normativas de la construcción de la ciudadanía del siglo XXI.

¿Qué son las competencias ciudadanas?

Las competencias ciudadanas son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos respeten y defiendan los derechos humanos, contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respeten y valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a nivel internacional. En resumen, las competencias ciudadanas se refieren a saber interactuar en una sociedad democrática.

CONCLUSIONES

No puede existir un sistema electoral que se pueda catalogar de perfecto, el nuestro no lo es, pero es perfectible, cada experiencia en comicios, ha representado una oportunidad para avanzar en esta materia, como ya se dijo, desde el año de 1997, no ha existido en el Congreso de la Unión, una fuerza política con mayoría absoluta, capaz de reformar la Constitución y con ello las cuestiones electorales de forma unilateral, en ese entendido, se tiene que desde esa fecha, todas las reformas en materia de comicios, han sido aprobadas por la mayoría calificada, misma que se ha integrado por mas de una fuerza política, así, todo lo avanzado y construido es corresponsabilidad de los partidos políticos que hoy gobiernan, sin imposiciones ni “mayoriteos”.

En conclusión, se puede afirmar que el sistema electoral mexicano, aun no es a prueba de fallas, hay mucha tarea pendiente en materia de legislación, a fin de que se logre una verdadera percepción de libertad y justicia en las

elecciones, abonando con ello al fortalecimiento de la legitimidad de los gobernantes elegidos, pues este último punto, es el que mayor vulnerabilidad ha mostrado, ya que a pesar de que legal y formalmente, las elecciones desde el año 2002, ha sido calificadas legalmente como validas, esta calificación legal e institucional, ha tenido que convivir con la descalificación de parte de la sociedad, tachando al sistema electoral de injusto e ilegal.

Sin embargo, en un sistema en donde hay tareas pendientes por hacer y legislación que perfeccionar, no puede hablarse de que nuestro país este en medio de un retroceso democrático, al contrario, cada reforma y cada nueva ley, abonan a la construcción de un sistema electoral más fuerte y no puede decirse que nuestro sistema sea débil, pues desde la independencia, hasta el día de hoy, de forma gradual, imperfecta, quizá insuficiente, quizá lentamente, no del gusto de todos, pero irrefutablemente, siempre se ha avanzado en el camino de una mejor democracia, y por lo que toca a las inconformidades con nuestro actual sistema, cabría reflexionar, que el camino para afrontar las imperfecciones, es a través de la participación política misma, encausado a través de mejores leyes en la materia, pues al día de hoy, una de las mayores fortalezas del sistema electoral, son las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Y de manera paralela se debe trabajar en la construcción ciudadana visualizándola como la piedra angular del edificio democrático, confirmando que es ésta el conjunto de los ciudadanos donde reside la soberanía, la fuente de todo poder político de donde emanado de la voluntad popular. Y de esa voluntad popular surgen las normas y las instituciones que al mismo tiempo modulan las fórmulas de expresión de esa soberanía popular como característica nodal de todo régimen democrático.

La formación del ciudadano es, sin duda, una de las metas más importantes y prioritarias de las agendas político-educativas contemporáneas. la supervivencia de sus instituciones y las condiciones de gobernabilidad, pero sobre todo de legitimidad, dependen de las acciones ético-educativas que se encaren a efectos de capacitar a cada ciudadano para la práctica responsable, racional y autónoma de su ciudadanía; en este sentido, la construcción de una ciudadanía crítica y participativa parece ser la clave para resolver la diversidad de conflictos emergentes que reflejan la profunda crisis que afecta

actualmente a este régimen: desigualdades, exclusiones y discriminaciones, en algunos casos; corrupción política, apatía y escepticismo cívico, en otros.

Dra. María Magdalena Alanís Herrera.

Consejera Electoral

mmah1469@hotmail.com

BIBLIOGRAFÍA

COPARMEX. Índice de desarrollo Democrático. México 2011. Coparmex. México 2011.

GALEANA, Patricia. *El Camino de la Democracia en México, Construcción de la Democracia mexicana*. p. 18. Disponible en <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1015> <http://www.> (Consulta: Octubre 13 de 2008).

GAMIZ PARRAL, Máximo y otros, *Revocación de mandato*, UJED, Durango, México, 2006.

JUÁREZ a Santacilia, 12 de julio de 1859; en Jorge L Tamayo, *Epistolario de Benito Juárez*, Fondo de Cultura Económica, México, 1957

<http://chuma.cas.usf.edu/~swohlmut/latam/siglo19.html> (Consulta: Octubre 13 de 2008).